

(EFE).- Doce entidades de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Navarra han presentado hoy un manifiesto para defender los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante en estas comunidades.

Las plataformas que han firmado el texto son Impulso Ciudadano, Galicia Bilingüe, Fundación del Círculo Balear, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Escuelas Infantiles de Pamplona, Asociación por la Tolerancia, Círculo Cívico Valenciano, Asociación por la Lengua Común, Sociedad Civil de Navarra, Asociación por la Libertad de Elección Lingüística y la Asociación por la Defensa del Castellano.

El documento, presentado en la Casa Árabe de Madrid con el título "Por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España", pide que no se margine el idioma ni a las personas que decidan utilizarlo.

Según el texto, en las regiones con lenguas cooficiales se vulneran los derechos a recibir la enseñanza, a dirigirse a la administración pública y a desarrollar actividades culturales en castellano, entre otros.

También solicita disponer de información oficial, como las señalizaciones de tráfico, en castellano, además de en la lengua cooficial de cada autonomía.

Sin embargo, la representante de Galicia Bilingüe y presentadora del acto, Gloria Lago, ha resaltado que el objetivo del texto no es "menoscabar" los derechos de las lenguas cooficiales, sino que se respeten los del castellano.

El representante de Asociación por la Tolerancia Agustín Fernández ha acusado a la Generalitat de marginar a los niños cuyos padres eligen que estudien en castellano y ha puesto de ejemplo el caso de sus hijos.

Fernández ha explicado que en un primer momento sus dos hijos estaban en un centro concertado de Mataró y pidió que recibiesen más asignaturas en castellano. El colegio se negó, pero, según él, tras pasar por los tribunales, consiguió que recibiesen un 25 % de las asignaturas en castellano.

De acuerdo a Fernández, tras la resolución comenzó a recibir presiones por parte de la administración y las asociaciones de padres del colegio, así que decidió cambiar de centro a sus hijos y escolarizarlos en uno privado, en el que paga "10.000 euros" por cada uno, "un grave perjuicio económico" para su familia.

Ana Moreno, de Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha afirmado que su caso es similar porque ha perdido "muchas amistades" y se ha visto "obligada" a traspasar su negocio de Lleida desde que llevó a los tribunales al colegio de sus hijos para que les diesen más asignaturas en castellano.

Por su parte, otro de los firmantes del documento, Ernesto Ladrón de Guevara, ha afirmado que existe una paradoja "muy curiosa" en el País Vasco porque se está marginando el castellano cuando "sólo el 40 % de la población habla euskera".

Ladrón de Guevara ha destacado el caso de la Sanidad en el País Vasco, en la que "muchos médicos buenos y jóvenes se ven obligados a irse fuera porque en Euskadi valoran más que se sepa euskera que tener un doctorado en una oposición".

"Es una pena porque en vez de utilizar el euskera de forma que enriquezca nuestra región, con comportamientos así la empobrecemos", se ha lamentado.